MÉXICO Y LAS NACIONES UNIDAS: EL IMPERIO DEL DERECHO COMO OBJETIVO COMÚN

SERGIO GONZÁLEZ GÁLVEZ *

AL CONCLUIR LA primera guerra mundial se creó la Liga de las Naciones con el objetivo primordial de establecer un mecanismo para prevenir conflictos armados futuros; sin embargo, en menos de dos décadas, fue patente que la Liga había fracasado en su misión y que el mundo se encontraba ante otro conflicto de carácter universal. Cuando la segunda guerra mundial estaba por terminar, en 1945, representantes de 51 naciones se reunieron en San Francisco para redactar y firmar la Carta de las Naciones Unidas y una nueva organización mundial, cuyo fin es al igual que el de su antecesora, mantener la paz internacional, se convirtió en realidad en octubre de ese mismo año.

Ahora, después de 30 años de trabajos, se discute si las Naciones Unidas han fracasado o han cumplido el propósito que sus fundadores le atribuyeron. Los que destacan las limitaciones de la Organización mundial señalan que no sólo la ONU ha fracasado en mantener la paz internacional, ya que desde 1945 han ocurrido más de 100 conflictos armados,¹ sino que la Organización tampoco ha tenido éxito en las áreas económica y social, en virtud de que, por una parte las propuestas aprobadas por sus órganos principales para promover el desarrollo económico y social no han logrado disminuir la brecha cada vez mayor que separa a los países ricos de los pobres y, por la otra, tampoco se han logrado adelantos significativos en las causas humanitarias.

Esos críticos también señalan que la falta de éxito de las Naciones Unidas no provocará necesariamente otro conflicto mundial como ocurrió en el caso de la Liga, y esto no será gracias a los esfuerzos de las Naciones Unidas, sino debido al balance de terror que vive el mundo con los instrumentos de destrucción cada vez más certeros que desarrolla el hombre, en otras palabras, el mejor disuasivo de otra conflagración será el convencimiento de los

* Servicio Exterior Mexicano.

¹ Estadísticas del Instituto de Investigaciones sobre la Paz de Suecia (SIPRI).

posibles contendientes de que el poder aniquilador de las armas existentes garantiza que no habrá supervivientes ni victoriosos en un próximo conflicto.

Otros, afortunadamente aún la mayoría y entre ellos México, ven a las Naciones Unidas como una organización necesaria en un mundo de interrelación y si bien reconocen que adolece de defectos estructurales, estiman que con voluntad política son superables y que, aceptando que la ONU no tiene vida propia, sino la que le den los Estados que la integran, la misión primordial ahora es fortalecer a la Organización a fin de que pueda cumplir mejor con sus funciones, además de que es difícil aceptar la afirmación de que ha fracasado en su misión primordial cuando en efecto ha sido el conducto para la solución de cientos de conflictos.

El objetivo de este trabajo es hacer un somero análisis de la participación de México en los trabajos de las Naciones Unidas, con especial referencia a los aspectos relacionados al desarrollo y codificación del derecho internacional; sin embargo, antes de comentar esos aspectos, parecería necesario recordar ciertos antecedentes sobre el origen de las Naciones Unidas que explican en parte algunos de los problemas a los que se enfrenta hoy en día.

Recordemos que la Carta de las Naciones Unidas, cuya redacción final tardó nueve semanas y que se firmó en el Teatro de la Ópera de San Francisco el 26 de junio de 1945, fue básicamente el resultado de un acuerdo previo entre los países victoriosos de la segunda guerra mundial que imprimieron a dicho documento, entre otras, las características siguientes:

a) El acuerdo logrado entre la Unión Soviética, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la República de China respecto a lo que debía ser el mundo de la posguerra, sugería la conveniencia de asegurarse una posición predominante en la nueva Organización, que lograron en gran medida con la aceptación, en la Carta, de la categoría de Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, cuyo concurso es necesario para adoptar cualquier decisión que afecte el mantenimiento de la paz, según se establece en los artículos 23 y 27 de la Carta, prerrogativa conocida como el derecho de veto o regla de la unanimidad.

Este criterio y la condición de que para ser invitado a la Conferencia de San Francisco era necesario que el país hubiera participado en la guerra contra las potencias del Eje, confirman que el criterio de los victoriosos prevaleció al adoptar las decisiones importantes de esa etapa.

b) Otra característica al configurar la nueva Organización fue el convencimiento de que para mantener la paz era necesario también que la Organización tuviera facultades respecto a asuntos económicos y sociales. Este punto de vista no fue aceptado inicialmente por la Unión Soviética que deseaba que la Organización tuviera como meta única mantener la paz y la seguridad internacionales y que veía poca base para aceptar la ampliación

del campo de acción de la Organización internacional que, lógicamente, tendría que basarse en un sistema económico cuya validez, por razones ideológicas, se rehusaba a aceptar. El necesario compromiso entre las dos posiciones produjo como resultado que el capítulo de la Carta de la ONU sobre cooperación económica y social sea de los más débiles de todo el Pacto de San Francisco.

c) Finalmente, como consecuencia de la experiencia de la Liga de las Naciones, cuyo Pacto trató de establecer un sistema que operaba en forma más o menos automática al aplicar sanciones de carácter económico y financiero contra un Estado que violaba la prohibición de hacer uso de la fuerza, se incluyó en la Carta lo que algunos teóricos han dado en llamar la indispensable relación entre responsabilidad y poder, que se refleja en el hecho de conceder el monopolio decisorio para aplicar medidas coercitivas al Consejo de Seguridad en el que están protegidos los intereses y responsabilidades de los principales victoriosos de la segunda contienda mundial pero definitivamente no los de la comunidad internacional de nuestros días.

De las consideraciones anteriores el lector comprenderá las limitaciones de la ONU para cumplir con su función en forma adecuada, con una Carta constitutiva basada más en criterios de poder que en un principio democrático; parecería que la Carta, a pesar de los esfuerzos de nuestros países en la Conferencia de San Francisco, se firmó para reafirmar la hegemonía de los victoriosos en la segunda guerra mundial en un documento descaradamente político, que en ninguno de los capítulos básicos hace referencia al derecho como fórmula para solucionar problemas o conflictos, por lo que ahora es difícil aceptar la tesis de que las decisiones impuestas por una inmensa mayoría de países, muchas veces precisamente para tratar de fijar normas de conducta, es lo que en realidad ha causado el debilitamiento de la ONU.

OPCIONES FUTURAS DE LA ONU

Respecto al papel de la ONU recordemos que el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, para muchos el mejor funcionario internacional desde la época de Eric Drummond en los tiempos de la Liga, señaló en la introducción a su Informe Anual a la Asamblea (que cubre el periodo del 16 de junio de 1960 al 15 de junio de 1961) que los dos caminos a seguir eran claros: mientras algunos miembros conciben a la ONU como "una maquinaria estática de conferencias para dialogar sobre conflictos de intereses e ideologías, apoyada por un secretariado que, lejos de servir a los intereses de la comunidad debía representar las ideologías en pugna, otros miembros habían dado muestras de que, al contrario,

veían a la Organización como un instrumento dinámico, a través del cual los gobiernos buscarían reconciliación en las divergencias y los mejores mecanismos para prevenir conflictos y resolverlos cuando ocurrieran.

El primero se basa en las tesis nacionalistas del pasado y, el segundo, en las necesidades del presente y del futuro en un mundo cada vez más dinámico, donde aumenta cada día el número de países que tienen a su alcance armamentos de fuerza destructiva desconocida. Es decir, el primero se basa en la tradicional filosofía del Estado soberano absoluto, siempre en competencia armada, potencial o real, del que lo más que se puede esperar en el campo internacional, es que logre ajustarse a una coexistencia precaria; mientras que el segundo prevé posibilidades para una acción intergubernamental y abre nuevos conductos o caminos para desarrollar formas más efectivas de cooperación internacional.

Creemos que las Naciones Unidas, en 1977, continúan luchando por lograr el paso de la primera a la segunda tesis planteada y que, en esa lucha, un país con las características de México tiene la obligación de coadyuvar para que así ocurra, incluso como medida de autoprotección en un mundo con las características geopolíticas del nuestro, en el que el relajamiento en la lucha ideológica entre las dos superpotencias implica el necesario entendimiento entre ellos respecto a áreas de influencia o hegemonía, en detrimento de los intereses de nuestros países, un mundo donde el abismo económico entre los ricos y los pobres es cada vez mayor; un mundo donde los países productores de materias primas han descubierto la fuerza que les da asociarse y utilizar sus productos de exportación con fines políticos y económicos; un mundo donde hay regiones en que aún se discrimina al hombre con base en su color, dejándole como única alternativa la violencia para eliminar la injusticia; un mundo donde la galopante tecnología nuclear hace cada vez más difícil su control y multiplica los peligros de una guerra nuclear, sea intencional o por accidente.

ACTUACIÓN DE MÉXICO

En ese marco de acción, México ha sentido que su interés es el de Naciones Unidas y así lo ha expresado por voz de sus representantes en varias ocasiones. La primera, en 1946, cuando el doctor Castillo Nájera señaló como uno de los objetivos de México al ingresar a dicho organismo internacional la "necesidad de que la convivencia entre los Estados se desarrolle armónicamente bajo el imperio del derecho". En esa ocasión indicamos que sólo una Organización de las Naciones Unidas fuerte evitará su propio descrédito y que su labor se limite a registrar acontecimientos de trascendencia mundial que se desarrollan sin su intervención, de ahí que —conti-

nuó señalando el representante mexicano— se imponga la necesidad de acelerar la consolidación de la paz, mediante los instrumentos internacionales que liquiden la incertidumbre, y de que la discusión de esos convenios se lleve a efecto, dentro del marco de nuestra Organización, o cuando menos, con la igualdad de derechos de todos los países que integraron el núcleo de las Naciones Unidas.²

Casi un año después, el 17 de septiembre de 1947, Torres Bodet igualmente señaló, en nombre de nuestro país, la urgencia de consolidar las Naciones Unidas, corrigiendo algunos de los errores que se habían cometido al crearla, refiriéndose al derecho de veto, aclarando que el problema no era la existencia de ese privilegio, sino la forma como lo ejercen los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad.

A ese respecto Jaime Torres Bodet dijo: “por huir de la unanimidad del conjunto que cristalizó en la Sociedad de las Naciones, tan difícil en muchos casos, creímos posible la unanimidad de aquellos que tienen, entre sí, probabilidades mayores de oposición. No es extraño, por tanto, que desde la I Asamblea General de las Naciones Unidas se haya suscitado un movimiento, en el que México participó, con objeto de precisar el ejercicio del veto. El resultado de ese movimiento fue una resolución de la Asamblea urgiendo a los Miembros del Consejo a fin de que usaran el veto con la discreción indispensable para que las funciones primordiales de nuestro organismo no se vieran entorpecidas. El veto nació de la guerra misma, como condición suplementaria de seguridad para aquellos que teniendo mayores recursos y, por consiguiente, más fuerza, deben también tener responsabilidad mayor”.³

Como clara muestra de esa continuidad de objetivos cabe señalar que el canciller Santiago Roel señaló recientemente la adhesión de México al principio de la democratización de los organismos internacionales de los que formamos parte, así como nuestra decisión de mantener incólumes los principios tradicionales en que se basa nuestra política exterior.⁴

Las intervenciones citadas señalan unas de las metas de México como miembro de las Naciones Unidas, y la congruencia con que hemos actuado para alcanzarlas, según fueron definidas en forma más completa en un documento que todo estudioso de la trayectoria de México en las Naciones

² Intervención de Francisco Castillo Nájera, el 24 de octubre de 1946, en la 35a. Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

³ Intervención de Jaime Torres Bodet, el 17 de septiembre de 1947, en la 82a. Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

⁴ Discursos del señor licenciado Santiago Roel, Secretario de Relaciones Exteriores pronunciados en el homenaje al general Lázaro Cárdenas en la Cancillería, el 20 de mayo de 1977 y en la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA celebrada en Grenada en junio de 1977.

Unidas debe conocer, me refiero a los comentarios de México al proyecto de Dumbarton Oaks para crear una organización internacional, del cual considero conveniente destacar las ideas siguientes cuya vigencia aún ahora nadie disputa:

1) A fin de asegurar el adecuado cumplimiento de sus objetivos, la organización internacional deberá definir con claridad los derechos y deberes de los Estados que la integran, así como los derechos y deberes internacionales del hombre.

2) La organización deberá tener carácter universal.

3) La organización internacional deberá reconocer la posibilidad de que existan organizaciones regionales que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos comunes.

4) No deberá cometerse nuevamente el error del Pacto de la Sociedad de Naciones de aceptar la fórmula de la unanimidad para la adopción de decisiones, que fue, en resumidas cuentas, una de las causas de su fracaso.

5) *La regla fundamental de conducta de los Estados Miembros debe ser el derecho internacional.*

6) Se reconoce el concepto de seguridad colectiva ante una agresión plenamente tipificada.

7) Debe darse un carácter superior en jerarquía a la de otros órganos a la Asamblea General, donde están representados todos los Estados Miembros.

8) Es fundamental reconocer que el mantenimiento de la paz exige avanzar hacia un desarme global que incluya necesariamente la reducción de los armamentos nacionales al mínimo compatible con la seguridad de sus respectivos territorios y con la ejecución de las obligaciones internacionales contraídas mediante convenios.

9) El tradicional concepto de paz, que implicaba simplemente la cesación de toda actividad bélica, ha sido modificado por la necesidad de elaborar una estrategia global para mantener la paz, que implique no sólo la eliminación de la guerra como instrumento de política sino la adopción de medidas económicas y sociales.

Ya iniciada la tarea formal de las Naciones Unidas, el mundo empezó a vivir la etapa llamada de la guerra fría en que se desmoronaron los acuerdos de las potencias victoriosas de la segunda guerra mundial, para iniciar una lucha por el predominio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y cuando esa situación provocó una crisis en la ONU, México, por voz de Luis Padilla Nervo, formuló el 28 de septiembre de 1948 la primera excitativa a las grandes potencias, en la Organización, hacia el compromiso, la tolerancia y la necesidad de consolidar la paz, lo cual ningún país se había atrevido a

hacer hasta entonces, quizás por temor a provocar la ira de alguno de los dos grandes.⁵

Dicha exhortación a las grandes potencias en un momento crucial se convirtió en la resolución 190 (III), aprobada por consenso en la Asamblea General, en la cual expresamente se recuerda un párrafo de la Declaración de Yalta del 11 de febrero de 1945 en la que Churchill, Roosevelt y Stalin reafirmaron su deseo de construir, en colaboración con las demás naciones pacíficas, *un orden mundial regido por el derecho* y consagrado a los intereses de la paz, la seguridad, la libertad y la prosperidad de toda la humanidad.

México ha pugnado por convertir el imperio del derecho en una realidad a través de 30 años de actividad congruente mediante importantes iniciativas, entre las cuales destacamos sólo algunas. En primer lugar recordemos que, como lo señaló Jorge Castañeda en la Comisión Jurídica de la Asamblea General, el 9 de noviembre de 1960, “es necesario reconocer que desde el final de la guerra han ocurrido, tanto en el orden político como en el económico y social, importantes fenómenos que no pueden dejar de ejercer una tremenda influencia en el derecho internacional; ha cambiado lo que podría llamarse la geografía del derecho internacional y ahora la creación de esta ciencia ya no es prerrogativa de las naciones que heredaron la tradición cultural de Occidente, sino una tarea común a todos los miembros de la comunidad universal”.⁶

Con base en esa afirmación México ha tratado de apoyar las iniciativas tendientes a actualizar y desarrollar el derecho internacional a través de la elaboración de convenciones y códigos de conducta con la participación de todos los Estados Miembros.

Además de esta posición de principio, que se ha reflejado en la elaboración de convenciones sobre el derecho del mar, del derecho de los tratados y de las relaciones e inmunidades diplomáticas y consulares, así como en los códigos de conducta sobre transnacionales y sobre transferencia de tecnología, debemos recordar que nuestras propuestas no se han limitado a una sola área de actividad sino que se han ampliado a, entre otras, cuestiones coloniales. Por ejemplo, recordemos las ideas presentadas por México sobre el problema de África del Sur respecto a las conveniencias de que la Corte Internacional de Justicia examinara la legalidad o ilegalidad de la presencia de ese país racista en el territorio de África Sudoccidental que culminó finalmente, a petición del Consejo de Seguridad —según su resolución 276, de 1970— en una opinión consultiva de la CIJ del 21 de junio

⁵ Intervención de Luis Padilla Nervo, el 28 de septiembre de 1948, en la 147a. Sesión Plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

⁶ Intervención de Jorge Castañeda, el 9 de noviembre de 1960, en la 665a. Sesión de la Sexta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

de 1971, en que se confirmó la obligación de África del Sur de abandonar Namibia, la cual lamentablemente ese gobierno no ha aceptado hasta la fecha, como tampoco ha cumplido con las resoluciones sobre la materia adoptadas tanto por el Consejo de Seguridad como por la Asamblea General, actitud que tipifica un caso en el que la población de dicho territorio tiene el derecho natural y jurídico de hacer uso de la fuerza para lograr su independencia y autodeterminación.

En otra área de la codificación, la relativa al mantenimiento de la paz internacional, México colaboró en el esfuerzo realizado para definir lo que debe entenderse por agresión conforme al artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas que concluyó con éxito y participó activamente en la idea de codificar los principios jurídico-políticos incorporados en el artículo 2 del capítulo I de la Carta, que culminó con la adopción, en 1970, de la resolución 2625 (XXV). No debemos olvidar que México también colaboró en forma importante en la propuesta para codificar los principios de las relaciones económicas internacionales en una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada en 1974 en la ONU, y que actualmente está empeñado en la tarea de actualizar la Carta de las Naciones Unidas en un esfuerzo que presenta numerosos problemas, en virtud de la oposición a cualquier modificación constitucional de los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad que elimina cualquier posibilidad, debido a que el artículo 108 de la Carta da a los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad veto sobre cualquier enmienda.

DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN

Los esfuerzos para definir, jurídicamente hablando, el alcance de lo que constituye una agresión armada culminaron en 1974 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó su resolución 3314 (XXIX) anexo a la cual se incluyó una definición de lo que es agresión en el contexto del artículo 39 de la Carta⁷ que señala la facultad del Consejo de Seguridad para determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la cual presenta las características siguientes: a) reconoce en principio que el que primero hace uso de la fuerza entre dos contrincantes es el agresor, derrotándose la tesis mantenida por algunos países occidentales de que para calificar al agresor era necesario descubrir si había habido intención agresiva o no; b) incluye una lista enunciativa, no limitativa, de actos típicos de agresión, sin menoscabo de la facultad del Consejo de Seguridad para determinar otros actos que constituyen agresión,

⁷ Véase el anexo 1 al final del artículo.

y c) reconoce, en términos más o menos claros, que cualquier acto de fuerza de un pueblo privado de su libertad o sujeto a cualquier otra forma de dominación extranjera contra la potencia colonialista, no podrá ser considerado como un acto de agresión.

Durante la negociación de esta importante iniciativa, México puso énfasis en que la definición de la agresión servirá, en una época en que la opinión pública influye cada vez más en la evolución de los asuntos internacionales, como una guía que ilustrará a la opinión pública y le facilitará el enjuiciamiento de la actitud de los gobiernos, ya sea del propio o de los ajenos, además de la utilidad que tendrá para el Consejo de Seguridad y la Asamblea al examinar un conflicto.

Respecto al contenido de la definición sostuvimos, con resultados positivos, que el texto debía reflejar claramente que la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus órganos competentes, debe mantener un monopolio virtual de la facultad calificadora y decisoria sobre cualquier uso de la fuerza, señalando claramente que la única excepción a esa centralización está en el ejercicio del derecho de legítima defensa y esto únicamente en caso de un ataque armado, derecho que no podrá ejercitarse bajo ninguna otra circunstancia, sean amenazas graves o la violación de deberes internacionales.

Como corolario de lo anterior —y siempre con la intención de limitar jurídicamente al máximo a un posible agresor— sostuvimos la tesis que finalmente quedó reflejada en la definición, de que el que primero hace uso de la fuerza debe ser considerado un agresor, salvo prueba en contrario, pues aquellos que sostienen que la cuestión consiste no en quién ha cruzado la frontera o atacado primero, sino en quién ha preparado la guerra, no han tomado en cuenta que en la actualidad la preparación para una guerra se confunde con la carrera de armamentos, resultando imposible determinar al agresor, a menos que se haga un estudio histórico o estratégico de las razones por las que cada contendiente empezó a aumentar su armamento, además de lo difícil que sería trazar una línea entre la preparación para la legítima defensa y la preparación para la guerra agresiva.

Aunque tuvo que evitarse la mención de importantes conceptos ante la divergencia de opiniones, cabe destacar que las dos preocupaciones fundamentales de México al redactar la definición eran, por un lado, evitar que el concepto de legítima defensa colectiva pudiera ampliarse a casos que no fueran un ataque armado, dando así mayores posibilidades para que con base en acuerdos regionales se legitimara el uso de la fuerza, contrariando el artículo 51 de la Carta, y que se dejará a la interpretación la posibilidad de que los organismos regionales apliquen medidas coercitivas contrariando el artículo 53. Ambos conceptos fueron considerados, sobre todo a la luz

de la práctica de la OEA y ante la imposibilidad de lograr acuerdo se decidió eliminar toda referencia al problema lo que sin duda representa una seria laguna en el desarrollo del concepto de no agresión.

Como se recordará, y aunque no existe una definición técnica de lo que es una medida coercitiva, México ha mantenido, con base en lo que señala la Corte Internacional de Justicia en el caso "Expenses Case", de 1962, y algunos prestigiados internacionalistas que, para que una medida sea calificada de coercitiva, es necesario que reúna los elementos siguientes: 1) que implique siempre un principio de coerción contra un Estado o alguna autocracia; 2) que su propósito sea la prevención o supresión de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, tesis que no es aceptada por aquellos que sostienen las ventajas políticas de que los organismos regionales puedan aplicar sanciones sin la previa autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, entre los que como es lógico suponer no se cuenta México.

PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL RELATIVOS A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS

Por resolución 1505 (XV), del 12 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió incluir el tema titulado "Labor futura en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional" que fue la base para que al año siguiente, un grupo de delegaciones de países No Alineados propusieran la inclusión del tema titulado "Examen de los principios referentes a la coexistencia pacífica de los Estados" aunque, con base en una propuesta de los Estados Unidos y otros países, se transformó en "Las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas", en virtud de la connotación política que algunos atribuyeron al término "coexistencia pacífica" o sea la doctrina proclamada por la Unión Soviética en un momento determinado de la posguerra.

Esta enmienda fue aceptada por los autores del proyecto original, con el sentir general de la Comisión de que la frase "coexistencia pacífica de los Estados" tenía un significado histórico exactamente igual al propuesto por Estados Unidos adoptándose en ese entendimiento la resolución 1686 (XVI).

Esta resolución inició el proceso tendiente a adoptar una declaración que desarrollara los principios de derecho internacional incluidos en el artículo 2 del capítulo I de la Carta de San Francisco, con el objetivo de definirlos más claramente y hacerlos de más fácil aplicación, convencidos de que cuando los Estados acceden a solucionar sus diferencias por medios jurídicos y

respetan los derechos de los demás Estados, se pueden establecer verdaderas relaciones de amistad y de cooperación.

Durante el proceso de negociación de este documento se presentaron varias iniciativas tendientes a determinar cuáles eran los principios sujetos a estudio, decidiéndose finalmente iniciar el trabajo con los siguientes: a) el principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas; b) el principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se ponga en peligro la paz o la seguridad internacionales ni la justicia; c) la obligación de no intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados; y d) el principio de la igualdad soberana de los Estados; agregándose posteriormente otros dos: la obligación de los Estados de cooperar entre sí y el importante principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos.

Previamente a la elaboración de los principios, la Comisión Jurídica llevó a cabo un interesante debate sobre la forma en que debían presentarse los resultados de ese trabajo, es decir, si debía establecerse como objetivo una convención, un código o declaración o una resolución; México formuló al respecto algunas consideraciones que conviene recordar, comenzando por destacar que entre las fuentes del derecho internacional reconocidas tradicionalmente, y enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, no se hace mención alguna a las decisiones adoptadas por los organismos internacionales, desconociendo su cada vez más importante contribución al desarrollo del derecho internacional.

Se admite generalmente que la base legal de una decisión de este tipo se encuentra en la aceptación de los Estados a las normas *per se* y, en ese caso, la adopción de una resolución en un organismo internacional sólo estaría confirmando una regla consuetudinaria de derecho internacional, o sea de *lex lata*. Además deben considerarse otros elementos al calcular el valor jurídico de una decisión como fuente de derecho internacional, entre ellos, por ejemplo: el prestigio de la Organización mundial, la intención del cuerpo al adoptar la misma y la votación que logró. Como muestra de lo anterior se puede recordar el tratamiento dado en la asamblea al Proyecto de Declaración sobre Derechos y Deberes de los Estados, respecto al cual no cabe duda que la Asamblea dejó bien claro que no intentaba otorgarle valor jurídico alguno al adoptar una resolución.

Al contrario del caso citado, cabe mencionar las resoluciones "Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales" —1514

(XV) de la Asamblea General— y la que confirma el derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, intitulada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales de los países en desarrollo y expansión de las fuentes internas de acumulación para el desarrollo económico” —2692 (XXV) de la Asamblea General—, decisiones que sin duda concretan, aclaran y precisan reglas de derecho internacional ya consagradas por la costumbre internacional.

No podemos dejar de mencionar que la contribución mexicana a la elaboración de los principios de derecho internacional incorporada en la resolución 2625 (XXV)⁸ de la Asamblea General fue sustancial al lograr, después de difíciles esfuerzos, la aceptación unánime de una adecuada definición de lo que debe entenderse como no intervención de un Estado en los asuntos de otro, que inclusive los Estados Unidos llegaron a negar públicamente, arguyendo que la Carta de la ONU exclusivamente prohíbe la intervención de la Organización en los asuntos internos de un Estado. La actitud de México respecto a este principio se basó en los artículos sobre no intervención de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía —resolución 2131 (XX)—, aprobada también por la Asamblea General sobre ese tema después de la invasión a República Dominicana.

Quizás el otro principio, en cuya definición la participación mexicana fue notoria, fue el relativo a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, respecto al cual presentamos el primer proyecto que sirvió de base para posteriores negociaciones logrando además incluir el deber de abstenerse de actos de represalia, que confirma por primera ocasión en un texto legal de aplicación universal la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad, el 9 de abril de 1964, cuando expresamente condenó la represalia armada de la Gran Bretaña contra un país árabe, como incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Además, en una negociación conjunta de los países latinoamericanos se incorporó como corolario de la prohibición al uso de la fuerza, la prohibición de ocupar militarmente un territorio y la prohibición de reconocer como legal cualquier adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza, cuya aplicación en situaciones actuales sigue siendo fundamental.

Quizás los dos principios incluidos en la Declaración, cuya negociación fue más difícil y por lo tanto son los más modestos en sus conceptos, son el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y el de la solución pacífica de los conflictos.

⁸ Anexo 2.

El primero debido a que mientras las potencias coloniales mantuvieron que los capítulos XI y XII de la Carta aceptan la existencia jurídica de colonias, África, Asia y América Latina, con el decidido apoyo socialista, sostuvieron que las disposiciones de la Carta sobre el régimen de administración fiduciaria han quedado *de facto* superadas al adoptarse la famosa resolución 1514 (XV) que declara el derecho de todos los pueblos y países sujetos a un régimen colonial a su inmediata autodeterminación e independencia, criterio cuya validez se confirma año tras año al examinarse el informe del Comité creado con objeto de aplicar dicha resolución.

Las dos cláusulas que permitieron el compromiso sobre este tema fueron: una, la que establece explícitamente la posibilidad de que el ejercicio de autodeterminación no necesariamente debe culminar en la independencia, sino también en la libre asociación o integración con un Estado independiente; y la otra, que establece la integridad territorial como elemento limitante en el ejercicio de la autodeterminación.

Por su parte, las posibilidades de avanzar en forma significativa en el desarrollo de los principios de solución pacífica de conflictos en la multicitada Declaración fueron limitadas debido básicamente a la desconfianza de los países que adquirieron su independencia en los años sesenta, que constituyen un número importante para aceptar la aplicación de una solución pacífica con base en un cuerpo de derecho internacional creado a sus espaldas, e inclusive en contra de sus intereses, así como la insistencia de los países occidentales de otorgar una prioridad, injustificada por cierto, a la Corte Internacional de Justicia como el órgano adecuado para la solución de todos los conflictos.

CARTA DE LA ONU

El 17 de diciembre de 1974 la Asamblea General adoptó la resolución 3349 (XXIX), mediante la cual se decidió establecer un comité *ad hoc* sobre la Carta de las Naciones Unidas con el mandato de examinar "las observaciones que presenten los gobiernos sobre ese tema, las propuestas concretas que lleguen a formularse con miras de complementar la capacidad de las Naciones Unidas y cualquier otra propuesta sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas que no requiera la introducción de reformas a la Carta".

Este tema, al que México no había prestado su apoyo en la fase inicial debido, entre otras cosas, al patrocinio del grupo de países que tradicionalmente han tratado de modificar la Carta con fines egoístas para ganarse un puesto como Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, ahora se presenta con diferentes características, al permitir el análisis de iniciativas

que podrían implicar enmiendas a la Carta como propuestas que no requieren la ratificación a que se refiere el artículo 108; ante este nuevo enfoque, México ha presentado una serie de iniciativas, aunque persiste una clara divergencia de opinión entre la Unión Soviética y otros países socialistas, apoyados por Francia y la Gran Bretaña, que mantienen que no debe modificarse ni una coma de la Carta de San Francisco ante el temor de perder el derecho de veto y aquellos otros países que, como México, consideran que si bien deben respetarse los elementos básicos de la Carta, existen cláusulas obsoletas y capítulos que requieren actualización.

Aun cuando este trabajo sólo comienza, bien podemos mencionar que entre las ideas avanzadas por nuestro país están la necesidad de reestructurar los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, a fin de poder aplicar adecuadamente los principios del Nuevo Orden Económico Internacional; una nueva exhortación a la Asamblea General, similar a la que formuló Padilla Nervo hace 20 años, a fin de que los Estados miembros demuestren su fe en la Organización sometiendo a ese foro todo asunto o situación que conforme a la Carta sea de la competencia de la ONU, iniciativa que de aprobarse sería una respuesta a la cada vez más peligrosa tendencia de negociar fuera de las Naciones Unidas temas importantes, como por ejemplo las llamadas Conversaciones SALT, la Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional y algunas de las posibles soluciones a los problemas de Rodesia y África del Sur.

Además hemos propuesto en ese tema reforzar el mecanismo para la elaboración del derecho internacional, al sugerir la creación de comités *ad hoc* que complementen el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, cuya agenda no permite la inclusión de otros temas, y sugerimos una revisión general de la teoría sobre las fuentes del derecho internacional a fin de tomar en cuenta el valor de algunas decisiones de los organismos internacionales.

Aunque a toda luz son obsoletos, no hemos sugerido la eliminación de las referencias —en los artículos 53 y 107— a los Estados enemigos, sino hemos propuesto que los Estados miembros formulen observaciones sobre la posibilidad de eliminarlos en virtud de que, según algunos, esa eliminación tiene implicaciones que afectan la situación jurídica de las tropas aliadas en Berlín y en Alemania en general.

Con su tradicional posición militante en cuestiones de desarme, México ha propuesto, como parte de la actualización, toda una nueva estructura para el tratamiento de esos problemas a nivel global que garantice la participación de Francia y de la República Popular China en esas negociaciones.

Igualmente hemos sugerido la iniciación de negociaciones para concertar una convención sobre la solución pacífica de conflictos, que desarrollaría el

artículo 33 de la Carta de la ONU y la parte correspondiente de la Declaración de los principios de derecho internacional relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

México ha propuesto, también, se realice una revisión general del estado que guarda la aplicación del artículo 43 de la Carta, relativo a las operaciones para el mantenimiento de la paz, que consideramos fundamental para que la Organización pueda cumplir con las funciones que se le han encomendado.

En este artículo hemos tratado de demostrar el énfasis de la actuación de México en las Naciones Unidas en lo que podríamos calificar como la búsqueda del imperio del derecho en las relaciones internacionales, siempre con la intención de dar a la Organización mundial una estructura más democrática, mediante el establecimiento de normas que eliminen la fase de interdeterminación y subjetivismo a que está sujeto el juicio político según el criterio impuesto por los países victoriosos de la segunda guerra mundial en la Conferencia de San Francisco, el cual obviamente no responde más a las necesidades del mundo moderno.

Los éxitos de las Naciones Unidas en este campo tienen importancia en cuanto a que ayudan a restablecer el equilibrio de los factores en que se basa la convivencia humana en el difícil camino hacia formas más perfectas de organización supranacional.

ANEXO 1

*Definición de la agresión**

La Asamblea General,

Basándose en el hecho de que uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales y adoptar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz,

Recordando que el Consejo de Seguridad, en conformidad con el Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales,

Recordando también el deber de los Estados, conforme a la Carta, de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal mane-

* Anexo a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

ra que no se pongan en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales,

Teniendo presente que nada de lo dispuesto en la presente Definición podrá interpretarse en ningún sentido que afecte el alcance de las disposiciones de la Carta relativas a las funciones y poderes de los órganos de las Naciones Unidas,

Considerando también que, en vista de que la agresión constituye la forma más grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza y de que, con la existencia de armas de destrucción en masa de todo tipo, entraña la posible amenaza de un conflicto mundial con todas sus consecuencias catastróficas, debería definirse la agresión en la etapa actual,

Reafirmando el deber de los Estados de abstenerse de hacer uso de la fuerza armada para privar a los pueblos de su derecho a la libre determinación, libertad e independencia, o para alterar su integridad territorial,

Reafirmando también que el territorio de un Estado es inviolable y no podrá ser objeto, ni siquiera transitoriamente, de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado en contravención de la Carta, y que no podrá ser objeto de adquisición por otro Estado como resultado de tales medidas o de la amenaza de recurrir a ellas,

Reafirmando además las disposiciones de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

Convencida de que la adopción de una definición de la agresión debería producir el efecto de disuadir a un agresor potencial, facilitaría la determinación de actos de agresión y la aplicación de medidas para suprimirlos, y permitiría asimismo proteger los derechos y legítimos intereses de la víctima y prestarle ayuda,

Estimando que, si bien ha de considerarse la cuestión de si se ha cometido un acto de agresión a la luz de todas las circunstancias de cada caso concreto, conviene, no obstante, formular principios fundamentales que sirvan de directrices para tal determinación,

Adopta la siguiente Definición de la agresión:

Artículo 1

La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente Definición.

Nota explicativa: En esta Definición el término "Estado":

- a) Se utiliza sin perjuicio de las cuestiones de reconocimiento o de que un Estado sea o no Miembro de las Naciones Unidas;
- b) Incluye el concepto de un "grupo de Estados", cuando proceda.

Artículo 2

El primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de la Carta constituirá prueba *prima facie* de un acto de agresión, aunque el Consejo de Seguridad puede concluir, de conformidad con la Carta, que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión no estaría justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes, incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son de suficiente gravedad.

Artículo 3

Con sujeción a las disposiciones del artículo 2 y de conformidad con ellas, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

- a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
- b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
- c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;
- d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;
- e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;
- f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;
- g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.

Artículo 4

La enumeración de los actos mencionados anteriormente no es exhaustiva y el Consejo de Seguridad podrá determinar qué otros actos constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones de la Carta.

Artículo 5

1. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión.

2. La guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional.

3. Ninguna adquisición territorial o ventaja especial resultante de una agresión es lícita ni será reconocida como tal.

Artículo 6

Nada de lo dispuesto en la presente Definición se interpretará en el sentido de que amplía o restringe en forma alguna el alcance de la Carta, incluidas sus disposiciones relativas a los casos en que es lícito el uso de la fuerza.

Artículo 7

Nada de lo establecido en esta Definición, y en particular en el artículo 3, podrá perjudicar en forma alguna el derecho a la libre determinación, la libertad y la independencia, tal como surge de la Carta, de pueblos privados por la fuerza de ese derecho, a los que se refiere la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en particular los pueblos que están bajo regímenes coloniales y racistas u otras formas de dominación extranjera; ni el derecho de esos pueblos a luchar con tal fin y pedir y recibir apoyo, de acuerdo con los principios de la Carta y en conformidad con la Declaración antes mencionada.

Artículo 8

Por lo que respecta a su interpretación y aplicación, las disposiciones que anteceden están relacionadas entre sí y cada una de ellas debe interpretarse en el contexto de las restantes.

ANEXO 2

*Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas**

*Preámbulo**La Asamblea General,*

Reafirmando que, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, entre los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas figura el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación entre las naciones,

Recordando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,

Teniendo presente la importancia de mantener y fortalecer la paz internacional fundada en la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos fundamentales y de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo,

Teniendo presente además la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para fomentar el imperio del derecho entre las naciones,

Considerando que la fiel observancia de los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y al cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por los Estados, de conformidad con la Carta, es de la mayor importancia para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y para la realización de los demás propósitos de las Naciones Unidas,

Observando que los grandes cambios políticos, económicos y sociales y el progreso científico que han tenido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta hacen que adquieran mayor importancia estos principios y la necesidad de aplicarlos de forma más efectiva en la conducta de los Estados en todas las esferas,

Recordando el principio establecido de que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera, y consciente de que en las Naciones Unidas se está considerando la cuestión del establecimiento de otras disposiciones pertinentes de inspiración similar,

* Anexo a la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Convencida de que el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones, ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta, entraña la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales,

Recordando el deber de los Estados de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de ejercer coerción militar, política, económica o de cualquier otra índole contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado,

Considerando que es indispensable que todos los Estados se abstengan, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Considerando que es indispensable igualmente que todos los Estados arreglen sus controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta.

Reafirmando, de conformidad con la Carta, la importancia básica de la igualdad soberana y subrayando que los propósitos de las Naciones Unidas sólo podrán realizarse si los Estados disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en sus relaciones internacionales,

Convencida de que la sujeción de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye uno de los mayores obstáculos al fomento de la paz y la seguridad internacionales,

Convencida de que el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una importante contribución al derecho internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es de suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad soberana,

Convencida, en consecuencia, de que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta,

Considerando las disposiciones de la Carta en su conjunto y teniendo en cuenta la función de las resoluciones pertinentes aprobadas por los órganos competentes de las Naciones Unidas en relación con el contenido de los principios,

Considerando que el desarrollo progresivo y la codificación de los siguientes principios:

- a) El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,
- b) El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia,
- c) La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta,
- d) La obligación de los Estados de cooperar entre sí, conforme a la Carta,
- e) El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos,
- f) El principio de la igualdad soberana de los Estados,
- g) El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta,

para conseguir su ampliación más efectiva dentro de la comunidad internacional, fomentarán la realización de los propósitos de las Naciones Unidas,

Habiendo considerado los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados,

1. *Solemnemente proclama* los siguientes principios:

El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas

Todo Estado tiene el deber de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales.

Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que, con arreglo al derecho internacional, entraña responsabilidad.

Conforme a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los Estados tienen el deber de abstenerse de hacer propaganda en favor de las guerras de agresión.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las fronteras internacionales existentes de otro Estado o como medio de resolver controversias internacionales, incluso las controversias territoriales y los problemas relativos a las fronteras de los Estados.

Asimismo, todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para violar las líneas internacionales de demarcación, tales como las líneas de armisticio, que se establezcan por un acuerdo internacional del que sea parte o que esté obligado a respetar por otras razones, o de conformidad con ese acuerdo. Nada de lo anterior se interpretará en el sentido de que prejuzga las posiciones de las partes interesadas en relación con la condición y efectos de dichas líneas de acuerdo con sus regímenes especiales, ni en el sentido de que afecta a su carácter temporal.

Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia a los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos, cuando los actos a que se hace referencia en el presente párrafo impliquen el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza.

El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. Nada de lo dispuesto anteriormente se interpretará en un sentido que afecte:

- a) Las disposiciones de la Carta o cualquier acuerdo internacional anterior al régimen de la Carta y que sea válido según el derecho internacional; o
- b) Los poderes del Consejo de Seguridad de conformidad con la Carta.

Todos los Estados deberán realizar de buena fe negociaciones encaminadas a la rápida celebración de un tratado universal de desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, y esforzarse por adoptar medidas adecuadas para reducir la tirantez internacional y fortalecer la confianza entre los Estados.

Todos los Estados deberán cumplir de buena fe las obligaciones que les incumben en virtud de los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional con respecto al mantenimiento de la paz y la seguri-

dad internacionales, y tratarán de aumentar la eficacia del sistema de seguridad de las Naciones Unidas basado en la Carta.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se interpretará en el sentido de que amplía o disminuye en forma alguna el alcance de las disposiciones de la Carta relativas a los casos en que es legítimo el uso de la fuerza.

El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia

Todos los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia.

Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por uno de los medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios pacíficos acordados por ellas.

Los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación al punto de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y obrarán en conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará conforme al principio de libre elección de los medios. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad soberana.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes prejuzga o deroga las disposiciones aplicables de la Carta, en particular las relativas al arreglo pacífico de controversias internacionales.

El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional.

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado.

El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención.

Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.

Nada en los párrafos precedentes deberá interpretarse en el sentido de afectar las disposiciones pertinentes de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

*La obligación de los Estados de cooperar entre sí,
de conformidad con la Carta*

Los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias.

A este fin:

- a) Los Estados deben cooperar con otros Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;
- b) Los Estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad

de tales derechos y libertades, y para eliminar todas las formas de discriminación racial y todas las formas de intolerancia religiosa;

e) Los Estados deben conducir sus relaciones internacionales en las esferas económica, social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de la igualdad soberana y la no intervención;

d) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta.

Los Estados deben cooperar en las esferas económica, social y cultural, así como en la esfera de la ciencia y la tecnología, y promover el progreso de la cultura y la enseñanza en el mundo. Los Estados deben cooperar para promover el crecimiento económico en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo.

El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos

En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de:

a) Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y

b) Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo debidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos de que se trate;

y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta.

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta.

El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libre decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta.

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.

Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país.

El principio de la igualdad soberana de los Estados

Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:

- a) Los Estados son iguales jurídicamente;
- b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;
- c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados;
- d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables;

- e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político social, económico y cultural;
- f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.

El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta

Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.

Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos.

Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos.

Cuando las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales estén en pugna con las obligaciones de los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta, prevalecerán estas últimas.

DISPOSICIONES GENERALES

2. *Declara que:*

Por lo que respecta a su interpretación y aplicación, los principios que anteceden están relacionados entre sí y cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los restantes.

Nada de lo enunciado en la presente Declaración se interpretará en forma contraria a las disposiciones de la Carta o en perjuicio de los derechos y deberes de los Estados Miembros en virtud de la Carta o de los derechos de los pueblos en virtud de la Carta, teniendo en cuenta la formulación de esos derechos en la presente Declaración.

3. *Declara además que:*

Los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración constituyen principios básicos de derecho internacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por esos principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus relaciones mutuas sobre la base del estricto cumplimiento de esos principios.